

LA CIUDADANIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES

Ricardo Cortés Padilla¹

Marco Antonio Soto de la Torre²

INTRODUCCIÓN

Una característica importante de toda democracia es el principio de la igualdad, que traducida a términos prácticos operativos no es más que la cuestión de la equidad y justicia social, en el que todos los individuos somos iguales ante la ley y partimos de una misma base de oportunidades formales de competencia para realizar nuestras aspiraciones en aspectos económicos, políticos y sociales.

En este sentido, el principio de igualdad para realizar nuestras aspiraciones políticas, tanto para votar como para ser votado, en ejercicio pleno de nuestros derechos ciudadanos, es regulado por los árbitros electorales, quienes bajo los principios de igualdad, legalidad, imparcialidad, transparencia, equidad, certeza, etc. se encargan de brindar las condiciones necesarias de competencia para el ejercicio del voto y la búsqueda de un cargo público. Es por ello, que una de las conquistas de nuestro sistema electoral haya sido la ciudadanización de los órganos electorales, desde 1996, a fin de que el poder ejecutivo dejara de encabezar la organización y calificación de los procesos electorales; para dar paso a la participación de ciudadanos en los consejos de los institutos electorales, a fin de organizar los procesos electorales, y tomar las decisiones necesarias que conduzcan a buen término la elección de nuestros representantes políticos, en el marco de las reglas del juego y estricto apego a la ley, ajenos a preferencias partidistas y con la mayor objetividad posible.

Sin embargo, la selección de los consejeros electorales por parte del poder legislativo, en el ámbito federal y local, ha pasado por fuertes cuestionamientos,

¹ Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana y Maestro en Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Actualmente Profesor de Carrera de Medio Tiempo del Centro Universitario UAEM Amecameca, de la Universidad Autónoma del Estado de México.

² Estudiante de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en el Centro Universitario UAEM Amecameca, de la Universidad Autónoma del Estado de México.

poniendo en duda el verdadero sentido ciudadano de los consejeros seleccionados, dado que, los partidos políticos se han llegado a enfrascar en arduas discusiones y negociaciones para la selección de los consejeros ciudadanos, en donde este carácter parece dejarse de lado, en atención a la búsqueda de una cierta afinidad partidista.

Por tanto, consideramos que es relevante analizar el carácter ciudadano de los consejos generales electorales, tanto a nivel federal como local, a fin de rescatar las virtudes y bondades que han significado el proceso de ciudadanización de los consejos electorales; así como poner en evidencia los vicios y errores en los que se ha caído y que atentan contra el verdadero espíritu de ciudadanía de los órganos electorales. Análisis que nos permitirá buscar nuevas fórmulas para la selección de los consejeros electorales, sin poner en entredicho su verdadero carácter ciudadano, que venga a contribuir a la consolidación de nuestro proceso de democratización.

Sin lugar a dudas, hemos venido experimentando avances sustanciales en el proceso de democratización de nuestro régimen político, que se ven reflejados en la construcción de instituciones electorales cada vez más fuertes y con una aspiración de credibilidad, certeza e imparcialidad, que les permita convertirse en los árbitros de los procesos de elección de nuestros representantes públicos. No obstante, pese a dichos avances que han permitido transitar de órganos electorales dirigidos por el poder ejecutivo, legislativo y los partidos políticos, hacía órganos electorales dirigidos por consejeros electorales apartidistas y surgidos del seno de la sociedad civil; siguen existiendo cuentas pendientes en la búsqueda de una verdadera participación ciudadana en los órganos electorales, que sean capaces de conducir por el camino de la imparcialidad los procesos de elección de nuestras autoridades de gobierno.

Ante este panorama el reto sigue siendo complicado de enfrentar, puesto que para reivindicar el carácter ciudadano de los órganos electorales resulta necesario pensar nuevos mecanismos de designación de los consejeros electorales, ya que mientras los grupos parlamentarios tengan la facultad de proponerlos y elegirlos

con las dos terceras partes de los votos de los legisladores presentes, se genera necesariamente un sesgo partidario en la conformación de los órganos electorales.

La ciudadanización de los Consejos Electorales

No podemos perder de vista que el sistema político mexicano viene de una amplia tradición autoritaria, que empieza a dar muestra de agotamiento hacia finales de los 70's para dar inicio a un prolongado período de transición democrática que pasa por los 80's y 90's, como consecuencia de cuatro aspectos importantes:

Pérdida de credibilidad del sistema electoral, expresado en su punto más crítico en las elecciones presidenciales de 1976, cuando el candidato oficial fue el único contendiente registrado en el proceso electoral, situación que llevó al gobierno a impulsar una reforma electoral en 1977, que allanaba el camino para la creación y registro oficial de nuevos partidos políticos. Esta reforma repercutió en la ampliación del abanico de opciones políticas que se ofrecía a los electores.

Crisis del modelo económico basado en la sustitución de importaciones, que trajo como resultado la creciente reducción de apoyo de las bases sociales del Partido Revolucionario Institucional, que se refleja en el paulatino aumento de votos a favor de los partidos de oposición y por tanto, en una mayor competitividad electoral.

Crisis del corporativismo, que en gran medida es resultado de la crisis económica debido a que ante la incapacidad financiera del gobierno de seguir manteniendo relaciones de clientela política con las grandes corporaciones obreras, campesinas, populares y empresariales, se va minando el apoyo político incondicional de las bases sociales del partido oficial.

El surgimiento de una sociedad civil más participativa y exigente ante el poder público, que se expresa en una mayor pluralización de demandas y expectativas a las que el gobierno no ha podido ajustarse en el marco de las antedichas crisis. En donde, diferentes sectores sociales enfrentan las acciones estatales contra su nivel de vida y su deseo democrático, que han hecho más nutrido el caudal de votos de los partidos de oposición.

Podemos decir que la crisis de legitimidad del gobierno, la recesión económica, el costo social de las medidas estabilizadoras que conllevan a una crisis del corporativismo mexicano, contribuyó a una lenta y paulatina transición democrática del sistema político mexicano y del sistema electoral en particular. Sin embargo, no hay que perder de vista que dicho proceso de transición asumió un carácter muy *sui generis*, muy probablemente a consecuencia de que la transformación del sistema político se lleva a cabo

desde la lógica de la clase política en el poder, por lo que el régimen presidencial empieza a dar muestras de debilidad hasta el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León.

La crisis del régimen autoritario y la creciente debilidad presidencial se va a ver reflejada en la apertura de ciertos espacios de participación ciudadana, tal es el caso de los órganos electorales. En este sentido, la conversión de los consejos electorales en espacios de participación ciudadana llevada a su máxima expresión a raíz de la reforma electoral de 1996, cuando por primera vez en la historia contemporánea de México, el poder ejecutivo dejó de tener injerencia en los consejos electorales, a través del secretario de gobernación, quien era el que presidía el Consejo General de Instituto Federal Electoral, representó sin duda un avance importante en la búsqueda de generar mayores condiciones de imparcialidad; dado que con esta reforma se pretendía que el poder ejecutivo dejara de ser juez y parte en los comicios electorales, en los que el partido en el gobierno monopolizaba el acceso al poder.

Sin embargo, cabe mencionar que el proceso de ciudadanización de los Consejos Electorales se empezó a gestar desde la reforma de 1990, así lo consigna Luz Lomelí, cuando manifiesta que:

La propuesta inicial de incorporar ciudadanos y ciudadanas fue formulada por el PRD durante las negociaciones que culminaron con la creación de un órgano electoral autónomo (IFE) en 1990. La iniciativa perredista de esa época contiene, entre otras, dos aportaciones que continuaron avanzando durante los años siguientes: la exclusión del Ejecutivo Federal y de la Cámara de Senadores de la función electoral y la incorporación de “consejeros ciudadanos”... (Lomelí, 2006, 51).

De acuerdo con Lomelí desde 1990 se empiezan a dar los primeros pasos rumbo a la ciudadanización de los órganos electorales y en consecuencia a un proceso de separación de la tutela del poder ejecutivo sobre el Instituto Federal Electoral.

En 1994, el proceso de ciudadanización adquirió sustento constitucional. En su artículo 41, la ley fundamental establece que “ciudadanos” elegidos por el Congreso de la Unión son corresponsables de la organización electoral y, en

consecuencia, el COFIPE adopta la figura de los “consejeros ciudadanos”. No es un simple cambio de nombre sino que alude a su perfil y su función: se incorporan en su calidad de ciudadanos. Su función no es de expertos ni de asesores sino de participación ciudadana en funciones públicas y en decisiones políticas. La ley secundaria pide que tengan conocimientos en materia electoral pero no exige que sean expertos. (Lomelí, 2006, 53).

Es importante mencionar que en los primeros años de ciudadanización de los órganos electorales, este proceso asumió un carácter meramente de apertura de espacios de participación a la ciudadanía, a través de los Consejos Ciudadanos en el ámbito federal y local; sin que ello implicara destinar dichos espacios a la tecnocracia electoral, es decir a expertos en la materia. Ello implicó que fueran nombrados consejeros ciudadanos provenientes principalmente dedicados a la academia y a la investigación en temas de sociales principalmente.

No obstante, aun cuando desde la reforma de 1990 se empezaron a dar pasos importantes rumbo a la ciudadanización de los órganos electorales, no podemos perder de vista el hecho de que con la reforma electoral de 1996, los consejeros ciudadanos serían seleccionados por las dos terceras partes de los diputados presentes y a propuesta de las fracciones parlamentarias. Lo que de alguna manera, hacía prever que los consejeros ciudadanos deberían sus puestos a los partidos políticos, haciéndolos de cierta forma dependientes de los partidos políticos con representación en la Cámara de Diputados.

El país desde nuestro punto de vista ha avanzado paulatinamente en la democratización de sus instituciones, pero no en la ambigüedad de sus leyes, la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones políticas nos han llevado a participar más en los asuntos, que antes sólo estaban en manos del gobierno, los procesos electorales, partidos políticos, la existencia o creación de comités de participación ciudadana. Sin embargo, a pesar de todos estos cambios el desprestigio y la corrupción de nuestras instituciones en la que se ve hundida, paralizada la vida política de nuestro país tiene sus repercusiones, un ejemplo fue el abstencionismo en la elección federal del 2003, en la cual la Cámara de Diputados que, por su integración proporcional, tendría que ser el órgano más representativo del Estado mexicano, fue electa por una minoría del 41% de los ciudadanos con derecho a votar. ¿esto que nos indica? Que hubo una gran pérdida de

legitimidad de las instituciones representativas, que de ser una característica casi exclusiva del PRI, ha pasado de alguna manera a contaminar a los demás partidos políticos, por la falta de credibilidad institucional. Aunado a esto hoy en día pasamos por una crisis de credibilidad en el Instituto Federal Electoral, después de vivir una contienda presidencial 2006 tan cerrada y en donde salen a relucir deficiencias de la institución encargada de organizar dicho proceso electoral, dejando en el ánimo de la ciudadanía que las cosas no se llevaron a cabo con total eficiencia y transparencia, sufriendo un grave retroceso de legitimidad ante la opinión pública.

La deslegitimación de la política en México encuentra también su origen en una constante de los últimos años: el creciente enfrentamiento entre poderes de la Unión, particularmente entre el poder ejecutivo y el legislativo, lo que acentúa la percepción ciudadana de que es gobernada por una clase política ineficiente y parasitaria, además de corrupta. Esta confrontación no ha llegado aún a los extremos de una crisis constitucional que implicaría, por ejemplo, ingobernabilidad, o la falta de aprobación de las leyes de ingresos o del presupuesto de la federación, pero si ha sido suficiente para estancar las reformas estructurales necesarias para el crecimiento y desarrollo económico proyectadas en el programa del gobierno foxista. La falta de consensos y acuerdos entre el poder legislativo y ejecutivo, caracterizó la acción gubernamental de Vicente Fox, incapaz de negociar con los partidos políticos por encima de sus intereses partidistas o de grupos que han frenado el crecimiento económico, por lo que no se podrán generar las oportunidades de ingresos y de bienestar a la velocidad requeridas para superar los problemas de pobreza, desigualdad, desempleo, inseguridad y corrupción, que han permanecido sin cambio en el mejor de los casos y en franco crecimiento en el peor de los mismos, lo cual hace cada vez más grande la brecha existente con los países desarrollados.

Por otra parte, la presidencia de la república, institución fundamental del sistema político, ha entrado en la fase terminal de una crisis que viene incubándose desde hace décadas, como lo demuestran unos cuantos ejemplos de la grave serie de errores y atropellos cometidos desde el poder presidencial, la dependencia económica respecto del petróleo durante el sexenio de José López Portillo, el sometimiento ante los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, así como el fraude electoral de 1988, los asesinatos políticos como norma, las privatizaciones corruptas, la pésima negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como consecuencia nos ofreció una competencia desleal y favorable para los inversionistas transnacionales, así como una paridad artificial de nuestra moneda, que condujo a la peor crisis de nuestra historia, el rescate y encubrimiento del mayor fraude bancario, y finalmente, el gobierno del cambio que ha fracasado en sus intentos por instrumentar las reformas estructurales, lo que ha generado una parálisis

legislativa, por un lado el Congreso elude su responsabilidad constitucional y con su electorado, en sacar dichas reformas, y justifica su trabajo legislativo con campañas publicitarias en radio, televisión y medios impresos que están trabajando y tomando decisiones de los diversos grupos de la población, como si se tratase de vendernos un producto de consumo. Y para dar al traste el presidente Vicente Fox no conforme con llevar a cabo una administración gris llena de errores y de descoordinación con su gabinete, lejos de trabajar en la consolidación de las instituciones democráticas, trata de emular a sus antecesores, y tratar de hacer valer atribuciones no contempladas en la constitución, se convierte en el primer y principal trasgresor del estado de derecho, al enarbolar la campaña presidencial del candidato de su partido, atentando directamente contra la equidad, como uno de los principios esenciales de la democracia, generando con ello un ambiente de crispación política y social por parte de aquellos que se sienten directamente afectados por este tipo de abuso del poder presidencial, en contubernio con actores políticos con un pasado político bastante cuestionable, que viene a poner en cuestionamiento la actuación de las instituciones encargadas de los procesos electorales, incluido el Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, quien llevó a cabo una calificación de la elección presidencial del 2006, con un gran favoritismo hacia el partido en el poder, como resultado de poner de manifiesto su reconocimiento de la presencia de diferentes irregularidades en el proceso electoral, pero que no tenían los elementos para cuantificar en que medida influyeron en el resultado final de la elección; es decir, que si hubo anomalías pero nada mas tantito, situación que adquiere gran relevancia si tomamos en cuenta los cerrados de la contienda.

En suma, ni el poder legislativo ni el ejecutivo han logrado consensos y acuerdos en el proceso de la negociación política que es la base de las democracias modernas, la gobernabilidad exige nuevos entendimientos para alcanzar acuerdos, tomar decisiones siempre en beneficio de la sociedad y fin del Estado; este es el punto clave que faltó para que las mencionadas reformas se concretizaran en la Cámara de Diputados. Por otra parte estas pésimas decisiones deben atribuirse, en buena medida, a los defectos de quienes las tomaron, pero la causa fundamental se encuentra en el sistema mismo de la toma de decisiones que, en el pasado, depositó demasiado poder en muy pocas manos y hoy pone de manifiesto su incapacidad estructural e institucional, para canalizar y armonizar los múltiples intereses de una nación compleja y plural como la nuestra.

La partidocracia Vs ciudadanización

En México los legisladores, en términos generales asumen una disciplina partidista, en el sentido de que votan las iniciativas de ley de acuerdo a los intereses de sus partidos y no del de sus representados, porque además como no existe la reelección parlamentaria inmediata, no están expuestos al castigo de sus electores, lo cual anula enormemente la posibilidad de

que el ejecutivo pueda negociar (o comprar) el apoyo de algunos legisladores a favor de sus iniciativas, a cambio de beneficios para sus representados. Situación que se viene a agravar, cuando lejos de que se llegue a la negociación y cooperación entre los poderes ejecutivo y legislativo, se adopta una relación de poder de suma-cero, por parte de los partidos políticos

De tal manera, que la partidocracia que se vive en nuestro sistema político mexicano y particularmente en el Congreso de la Unión, hace que el poder legislativo haya pasado de un sometimiento ante el ejecutivo, a un sometimiento ante los intereses partidistas, que lejos de trabajar en ambiente de cooperación en busca de acuerdo para el bien común, se imponen los intereses políticos de los partidos políticos, por lo que las negociaciones entre el gobierno y los partidos se gestan inclusive fuera del Congreso y con los personajes fuertes de sus institutos políticos. Ahora bien, dicha partidocracia y falta de acuerdos en el Congreso de la Unión, tiene un alto grado de responsabilidad en la pérdida del poder presidencial y en la crisis de legitimidad de instituciones ciudadanas como el Instituto Federal Electoral, ya que la integración de su consejo general es resultado de los intereses partidistas, en donde el Partido de la Revolución Democrática, y principal opositor al partido en el poder, quedó fuera de las negociaciones para dicha integración, cuestionando fuertemente su principio de imparcialidad.

Los cambios en el procedimiento para la elección de los ciudadanos consejeros muestra cómo la facultad del presidente de la República de designar a los comisionados, y más tarde de proponer consejeros, se transfiere a las fracciones parlamentarias, y la Cámara de Diputados elige entre ellos. De esta forma, el problema estriba en que la dependencia gubernamental se convierte en parlamentaria; y ésta, en la práctica produce un sesgo partidario. En efecto, son los partidos políticos que detentan curules quienes proponen y eligen por medio de sus diputados. Los partidos, por definición, son fracciones con intereses particulares. En su actuación y en la decisión de sus legisladores están siempre presentes la disciplina y los intereses partidarios. Es iluso pensar que actuarán de otra forma. En consecuencia, en la forma de elegir a los consejeros electorales se da siempre un sesgo partidario y el riesgo de que afecte la imparcialidad del órgano electoral. Esto sucede con independencia de que se logre o no el consenso entre los partidos. Esta última situación puede evitar las manifestaciones de descontento, pero no el sesgo partidario y el peligro latente que conlleva. (Lomelí, 2006, 57 y 58).

De tal manera, que mientras la designación de los Consejeros Electorales continúe en manos de las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados

en el ámbito federal y en los congresos locales en el ámbito local, resultará prácticamente imposible que la conformación de los órganos electorales responda a una lógica de repartición de cuotas partidistas, en donde no únicamente se pone en cuestionamiento el carácter ciudadano de dichos órganos sino inclusive su imparcialidad y hasta su autonomía.

El Instituto Nacional Electoral Vs Federalismo

Sin embargo, con el proceso de transición democrática que ha experimentado el país desde finales de la década de los 70's hasta fines del siglo XX, el presidencialismo autoritario posrevolucionario en México ha venido perdiendo fuerza como resultado de un mayor equilibrio de poderes entre el ejecutivo y el legislativo, así como entre los ámbitos de gobierno federal y local. No obstante, el debilitamiento del presidencialismo por desgracia también se ha traducido en el resurgimiento de los poderes locales, al grado de caer en prácticas caciquiles.

Si bien es cierto que por un lado, tenemos un sistema electoral multipartidista, con elecciones competitivas, con reglas que pretenden ser más equitativas, que fueron liberando paulatinamente espacios de poder, que antes sólo ocupaba el Partido Revolucionario Institucional (PRI), aún no se han podido superar viejos resabios del autoritarismo político que ha caracterizado la historia política del México posrevolucionario, ejemplo de ello es la persistencia y en algunos casos hasta el resurgimiento del caciquismo político local, tanto en el nivel estatal como el local.

Esto es, si por un lado el proceso de democratización del país ha apuntado a una mayor pluralidad y competitividad política en el país, expresada a partir de 1997 en la Cámara de Diputados cuando se queda sin mayoría absoluta, convirtiéndose en el punto de encuentro con la pluralidad; la división de poderes y las confrontaciones de las fuerzas políticas; por otro lado, este proceso de democratización lejos de permear a los ámbitos de gobierno locales, parecen propiciar el fortalecimiento de grupos políticos autoritarios, quienes en su lógica de mantenerse en el poder reproducen viejas prácticas caciquiles, que han llevado a sus demarcaciones al encono político y en el peor de los casos a reducir la competitividad electoral.

En este sentido, el proceso de democratización del país lejos de caminar por senderos paralelos en los diferentes ámbitos de gobierno, en algunos casos parecen ir en contrasentido, pues los grandes cambios que ha venido experimentando la vida democrática de la nación en el ámbito federal ha generado las condiciones para el fortalecimiento de prácticas caciquiles en algunos Estados de la República. Es decir, la mayor pluralidad política y equilibrio de poderes que se viven a nivel federal, indiscutiblemente ha repercutido en el debilitamiento del viejo presidencialismo autoritario,

contrariamente con el resurgimiento de los poderes locales como lo menciona Rogelio Hernández Rodríguez (2004), quien plantea las siguientes tesis:

- 1.- El caciquismo no ha desaparecido del país y a partir de la alternancia a nivel federal reaparece con más fuerza para recobrar posiciones particulares.
- 2.- La tradición centralista de nuestro país respondió al excesivo control que líderes y caciques locales tenían y ponían en riesgo la estabilidad política y como una amenaza a la unidad nacional.
- 3.- El resurgimiento de la gubernaturas es una manifestación de que la autoridad central se ha debilitado lo cual no se traduce en una garantía para la democracia, ya que el afianzamiento de las autonomías locales se ha confundido con un auténtico federalismo.
- 4.- El resurgimiento de las gubernaturas no se debe al aliento democrático sino al debilitamiento de los poderes centrales (administrativos, financieros y políticos) que han creado vacíos de poder que han sido llenados por los gobernadores.

De tal manera que un cambio en la relación entre los ámbitos de gobierno, en donde las entidades de la república adquieren una mayor autonomía frente al poder federal; autonomía que tendríamos que festejar en la aspiración de un verdadero federalismo, pero que desgraciadamente se ha traducido en el fortalecimiento del ejercicio autoritario del poder en algunos estados del país, tal es el ejemplo de las gubernaturas de Rubén Moreira en Coahuila, de Fidel Herrera en Veracruz y de Mario Marín en Puebla.

El caciquismo político en los gobiernos locales se traduce en una serie de consecuencias entre las que podemos destacar:

Falta de transparencia en el ejercicio de la administración pública.

Manejo irresponsable de las finanzas públicas.

Ejercicio centralizado del poder en relación con los congresos locales y con los gobiernos municipales.

Fortalecimiento de las relaciones corporativas y clientelares con los diferentes sectores sociales.

La lealtad al jefe o grupo político caciquil como lineamiento básico de los subalternos.

Control de los institutos electorales locales.

Control de los medios de comunicación locales.

Ante el resurgimiento de los poderes locales, y el férreo control que algunos de ellos han ostentado de los Institutos Electorales Locales, conformando Consejos Electorales completamente a conveniencia de los gobernadores, resulta atractiva la propuesta de impulsar la creación de un Instituto Nacional Electoral, que venga a organizar y realizar los procesos electorales locales, a fin de dotar nuevamente al órgano electoral de nuevos bríos de autonomía, imparcialidad y ciudadanización, que supere por completo sus tintes partidarios.

Bibliografía

- Crespo, José Antonio (1996). *Jaque al rey. Hacia un nuevo presidencialismo en México*, México, Editorial José Motriz.
- Hernández Rodríguez, Rogelio (2004). “El resurgimiento de los poderes locales”, en *Revista Estudios Sociológicos*, vol. 22, No. 003, pp.. 773-781
- Lomelí Meillon, Luz (2006). “Los órganos electorales, un espacio de participación ciudadana”, en *Revista Espiral*, Vol. XII, No. 36, mayo-agosto, pp. 41-60.
- López Mir, Elizabeth (2010). “El caciquismo político (1899-1920): una mirada desde la historiografía cubana”, en *Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales*, Universidad de Holguín, Cuba, diciembre 2010. (En línea: www.eumed.net/rev/cccss/10/).
- Mariátegui, José Carlos (1996). “Regionalismo y centralismo”, en Mariátegui, José Carlos. *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana*, Lima, Perú, Editorial Amatua.
- Muñoz Ledo, Porfirio. “Refundar la república”, en: *Voz y Voto*, México, No. 73, marzo de 1999, pp. 10-15.
- Rendón Corona, Armando. “El régimen autoritario”, en: *Iztapalapa, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, México, UAM-I, Núm. 32, enero-junio de 1994, pp. 91-106.
- Uvalle Berrones, Ricardo (1995). “Descentralización política y federalismo: consideraciones sobre el caso de México”, en *Revista Gestión y Estrategia*, UAM-Azcapotzalco, No. 7, enero-junio.